

ADIDA, 50 años de lucha

La Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, ha librado duras batallas por la defensa de la educación pública, los derechos de los educadores y la soberanía nacional.

Eduardo Benavides L. Director regional de Cedetrabajo, Antioquia.

*En las últimas décadas el magisterio ha sido un bastión del sindicalismo colombiano y ha logrado constituir la más importante organización sindical del país. Los maestros antioqueños han sido protagonistas importantes de este proceso y seguramente jugarán un papel decisivo en la reconquista de los derechos conculcados por los últimos gobiernos. **Deslinde***

La historia de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, está ligada a las grandes luchas de los educadores y el pueblo colombiano, por la defensa de sus intereses, desde el 15 de noviembre de 1951, cuando nació a la vida jurídica. Pero éste no era el primer intento de los docentes antioqueños por organizarse. Ya en 1910, un grupo de maestros creó la Sociedad Pedagógica Autónoma, cuyos objetivos giraban en torno al oficio, con la clara orientación de ser independiente frente a la Secretaría de Instrucción Pública, la cual reaccionó promoviendo la formación de la Junta de Institutores, adpta a los gobiernos nacional y local. Ambas organizaciones tuvieron una existencia efímera.

En 1936 el gobierno de Alfonso López Pumarejo convocó a los maestros a un examen de evaluación para finales del año, amenazando con destitución a quien no lo presentara, lo cual originó un rechazo inmediato por parte del magisterio nacional, que promovió la creación de la Confederación de Trabajadores de la Educación, acordando a la postre no realizarlo, lo que en Antioquia tuvo como consecuencia la formación de la Asociación Especial de Empleados del Ramo de la Educación, el 27 de agosto de 1936, que posteriormente se llamaría Confederación del Magisterio. El gobierno local despidió a decenas de educadores que no presentaron el examen de evaluación, creando una crisis de tales proporciones que se vio obligado a reintegrarlos a sus puestos.

Simultáneamente, otro grupo de docentes dirigidos por la Iglesia Católica decidió fundar en 1937 la Sociedad de Mutuo Auxilio del Magisterio, que posteriormente se constituyó en la Cooperativa de Institutores de Antioquia, dentro de la estrategia de la Iglesia y del Partido Conservador de crear cooperativas para oponerse al sindicalismo. Entre la Cooperativa y la Confederación se disputaron la organización y representatividad del magisterio antioqueño. La Confederación sufrió una fuerte persecución por parte del gobierno, la Iglesia y el Partido Conservador, lo cual fue debilitándola progresivamente hasta morir, mientras se fortalecía la Cooperativa, la cual, en palabras de su presidente Manuel Saldarriaga, en 1937, "Debe obrar en un todo de acuerdo con la Superintendencia de Cooperativas, la Gobernación y la Dirección de Educación" (1).

En 1945, como parte del auge organizativo que traían de tiempo atrás los trabajadores antioqueños, quienes en 1933 habían intentado crear la Unión Sindical de Antioquia y en 1936 fundaron la Federación de Trabajadores de Antioquia, Fedeta, que vivió su mayor auge durante los años cuarenta, los maestros se organizaron en el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, Sidete que llegó a tener

637 socios e introdujo formas de expresión no utilizadas hasta entonces por el gremio como circulares, boletines públicos y carteles. El Sidete también fue víctima de la persecución de los núcleos de poder, particularmente de la Iglesia Católica que a nombre del anticomunismo condenó las actividades de la Fedeta, promoviendo a nivel nacional la creación de una central obrera, la UTC, cuya filial en Antioquia sería la Unión de Trabajadores de Antioquia, Utran.

Esta situación, sumada a la llegada a la Presidencia de la República de Mariano Ospina Pérez y el desarrollo de la violencia que tuvo su mayor auge con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, determinó que el Sidete se extinguiera definitivamente a finales de ese año. El gobierno de Ospina Pérez prohibió en mayo de 1948 todo tipo de actividad sindical a excepción de aquellas explícitamente autorizadas por el Ejecutivo, que no eran otras que las autorizadas por la Iglesia a través de la Acción Social Católica. Bajo esta influencia, en 1949 se concedió personería jurídica a la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, y a sus filiales, entre ellas la Unión de Trabajadores de Antioquia, Utran, con lo que el sindicalismo colombiano quedó bajo la égida de la trilogía gobierno, Acción Social Católica, UTC. En estas condiciones y con el lema de "Dios, Patria y Magisterio" nació una nueva organización gremial en Medellín, denominada Confederación de Maestros de Antioquia, organización de tipo confesional que se afilió a la Confederación Interamericana de Maestros Católicos y encontró inmediato apoyo en el diario El Colombiano, ya desde entonces estrechamente ligado al Partido Conservador y a los intereses de las clases dominantes en el poder.

La creación en Antioquia de una organización de maestros bajo la rígida dirección de la Iglesia Católica y el gobierno fue emulada en otros departamentos como Nariño, Caldas y Córdoba. En Bolívar el lema fue: "Por la gloria de Dios, por el mejoramiento del magisterio, por la unidad gremial, por el progreso de la educación y por la grandeza de la Patria", mientras que en el Valle se fundó el Centro Nacional de Educadores de Cali bajo el lema: "Por Dios, por la Patria y por el Niño". La Confederación de Maestros de Antioquia fue utilizada por el gobierno seccional para perseguir a los educadores liberales y no para resolver las dos reivindicaciones más sentidas: el pago de sueldos atrasados y el incremento de los mismos que llevaban varios años congelados. Ambas solicitudes fueron negadas por la Asamblea Departamental, de abrumadora mayoría conservadora. La falta de autonomía de la Confederación frente al gobierno, su imposibilidad de movilizar al magisterio y su descrédito determinaron que en 1950, bajo la presidencia de Laureano Gómez, feneciera este intento de los maestros antioqueños por organizarse.

La fundación de Adida y el gobierno militar

Debido al fracaso de la Confederación de Maestros de Antioquia, otro grupo de educadores, preocupado por la no solución de sus problemas, particularmente por el congelamiento de los sueldos desde 1948, promovió en 1950 la fundación de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, para continuar la lucha por los intereses de los docentes. Sus socios fundadores, varios de ellos militantes activos del Partido Conservador en el poder, temerosos de que se ligara el nombre con cualquier tipo de actividad sindical, se decidieron por el de Asociación, el cual les brindaba algún manto de protección ante la implacable persecución política y sindical que adelantaba su partido en el gobierno. Aunque ligados igualmente a la Iglesia Católica, deseaban liberarse de la asfixiante tutoría que ésta ejercía sobre los sindicatos legalizados, para poder adelantar una lucha más efectiva por la conquista de sus reivindicaciones, lo cual se hizo más viable cuando el Ministerio de Trabajo concedió a Adida

la personería jurídica el 15 de noviembre de 1951, siendo uno de los pocos sindicatos que la obtuvieron bajo la presidencia de Laureano Gómez, hecho que se hizo posible gracias a los vínculos de sus fundadores con el Partido Conservador y que resultó crucial para la supervivencia, consolidación y desarrollo de la Asociación de Institutores de Antioquia.

Ante la violencia que se recrudeció en el país después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, las clases dominantes organizadas en los Partidos Conservador y Liberal, decidieron promover un golpe militar que pacificara el país, devolviera la estabilidad institucional y retornara el poder a sus tutores. Así, el 13 de junio de 1953 llegó al gobierno el general Gustavo Rojas Pinilla. Muy pronto Rojas mostró su verdadero interés de perpetuarse en el poder al impulsar la creación del Movimiento Acción Nacional, MAN, como su base política, y de la Confederación Nacional de Trabajadores, CNT, como su sustento sindical. La reacción no se hizo esperar y los conservadores, la Iglesia Católica y la UTC iniciaron una férrea oposición a tal iniciativa por considerarla de tinte peronista. Esta iniciativa influyó en el movimiento sindical y Adida no fue la excepción. Muy pronto algunos de sus miembros manifestaron sus simpatías por el gobierno del general y hasta cedieron espacios radiales que tenían en emisoras de Medellín para estimular el desarrollo tanto del MAN como de la CNT. Esto fue bien visto por las autoridades regionales que no obstaculizaron las actividades de la Asociación, haciendo posible que el número de afiliados creciera considerablemente.

En abril de 1954, Adida realizó su asamblea general anual que contó con la presencia como invitado especial del presidente nacional de la CNT progobiernista, quien introdujo el debate acerca de la desafiliación de Adida de la Utran y su consecuente afiliación a la CNT, lo cual fue aprobado con sólo un voto en contra. El gobierno militar recibió con extremo agrado la afiliación de Adida a la CNT, mientras que la Iglesia Católica inició una férrea oposición, incluyendo una Carta Pastoral publicada en *El Colombiano*, donde afirmaba: "La UTC es la única y confesional. Reprobamos a la CNT y prohibimos bajo pecado a nuestros fieles el pertenecer a ella o favorecerla de cualquier manera que sea" (2). Esta abierta presión ideológica de la Iglesia, más la decepción del magisterio antioqueño con el gobierno militar –pues a pesar de haberlo apoyado e incluso haberse afiliado a la CNT, los graves problemas del gremio seguían sin resolverse y el alza salarial decretada no llenaba las expectativas de los docentes– llevó a que en 1955 la asamblea general de Adida resolviera desafiliarse de la CNT y retornar a la UTC. A finales del año, la presión de la Iglesia y de los partidos tradicionales obligaron al gobierno militar a clausurar definitivamente la CNT.

Rojas Pinilla cayó en desgracia frente a sus promotores, quienes acudieron a la crisis política y económica para provocar su caída. Adida realizó su última asamblea general de este período en septiembre de 1956, meses antes de la caída del dictador, quien en mayo de 1957 fue reemplazado por una Junta Militar. Paradójicamente, mientras Adida –que básicamente agrupaba a los educadores de primaria– caía en un receso forzado por las circunstancias políticas, los profesores de secundaria decidían conformar su propia organización gremial un mes después de la caída de Rojas, la cual denominaron Asociación Antioqueña de Profesores de Secundaria, Asanprose, que más tarde se denominaría Proas. Adida volvió a retomar sus actividades normales únicamente hasta noviembre de 1958.

El Frente Nacional, la fundación de Fecode y el primer paro de Adida

Ante la nefasta experiencia que resultó para la oligarquía el gobierno de Rojas Pinilla, los partidos liberal y conservador promovieron un acuerdo para recuperar el poder y la institucionalidad, conocido históricamente como el Frente Nacional, consistente en repartirse alternadamente el gobierno de la nación, el cual se inició en mayo de 1958 con el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Este acontecimiento marcaría un cambio de las circunstancias políticas frente al gobierno militar y a los regímenes conservadores, en un período de auge de las luchas sociales en América Latina que al comenzar 1959 registraba el triunfo de la Revolución Cubana y una movilización antiimperialista continental.

El desarrollo de los acontecimientos nacionales, condujo a que diversas organizaciones del magisterio citaran en Bogotá un Primer Congreso de Educadores de Colombia en noviembre de 1958, con el fin de unificar sus luchas creando la Asociación Nacional de Educadores Colombianos, que más tarde se llamaría Fecodela cual se formalizó el 25 de marzo de 1959. A estas primeras citas concurren 11 delegaciones departamentales del magisterio. Los maestros antioqueños no asistieron, debido al carácter marcadamente conservador de la mayoría de los miembros de la junta directiva de Adida, quienes aún acataban las orientaciones de la Iglesia Católica y la UTC, acusando a la organización nacional de "centrista" como excusa para no asistir. Nuevas corrientes políticas se perfilaban dentro de las organizaciones gremiales del magisterio regional y nacional, lo que habría de cambiar definitivamente el rumbo ideológico y político de la mayoría de los educadores.

El gobierno de Lleras Camargo no mejoró las condiciones materiales de existencia de los colombianos y, al contrario, la pobreza y la violencia se agudizaron, provocando una cantidad de protestas populares, acaudilladas principalmente por los estudiantes. El magisterio antioqueño había reclamado desde años atrás el alza salarial, sin ser escuchado por la Asamblea Departamental –la cual definía sus condiciones laborales–. Finalmente, en noviembre de 1960 se logró una mejora que debería entrar en vigencia el primer día del siguiente año. Pero para entonces el gobernador de Antioquia, aduciendo déficit en las finanzas departamentales, pospuso el aumento para marzo, causando gran indignación entre los educadores y, así, el 15 de febrero la asamblea de socios de Adida decretó el primer paro de su historia. La respuesta del gobierno departamental fue amenazar inmediatamente a los educadores que participaran del paro con medidas que iban desde la destitución fulminante y la cancelación del escalafón hasta la pérdida de las prestaciones, fuera de las sanciones de tipo penal que se pudiesen imponer a los participantes.

La primera huelga de maestros recibió numerosas manifestaciones de apoyo de los sectores populares, destacándose la de los estudiantes de la Universidad de Antioquia, los trabajadores bancarios y el sindicato de trabajadores de las Empresas Públicas de Medellín. Al segundo día de paro, con el apoyo de los padres de familia y entonando el Himno Antioqueño, los educadores se tomaron, por primera vez también, las instalaciones de la gobernación. Igualmente, hubo tomas de calles donde se presentaron enfrentamientos con la policía, ocasionando la detención de varios educadores. Luego de cuatro días de intensa movilización, Adida llegó a un acuerdo con el gobierno departamental sobre la base de cancelar inmediatamente el aumento decretado y no sancionar a los participantes en la huelga, razón por la cual el 19 de febrero levantó el movimiento. Esta primera victoria permitió que se debilitara la corriente conservadora al interior de Adida y se fortaleciera una nueva corriente liberal, y una de las consecuencias inmediatas fue que se enviara dos delegados observadores al tercer congreso

de la organización nacional de los maestros, celebrado en Pasto, iniciando así los vínculos entre Fecode y Adida

El Partido Liberal y la izquierda en Adida

Simultáneamente, una disidencia de sindicalistas liberales al interior de la Utran-UTC promovió la creación de una nueva federación seccional de trabajadores en mayo de 1962, denominada Acción Sindical Antioqueña, ASA. La identificación de sus postulados con la corriente liberal, en ascenso en Adida, permitió que en asamblea general de julio de 1962 la Asociación de Institutores de Antioquia se desafiliara de la Utran y se afiliara a ASA. Esta nueva fuerza al interior de Adida también posibilitó que se afiliara a Fecode durante ese mismo mes.

La Acción Sindical Antioqueña se mostraba partidaria de un socialismo humanitario cristiano, anticapitalista y antisoviético, condenando "la sumisa obediencia al sindicalismo del imperialismo norteamericano por parte de la UTC y la CTC, y al imperialismo ruso por parte de la Fedeta" (3), identificándose con los postulados del Frente Unido del padre Camilo Torres. Impulsó entonces un fervoroso apoyo sindical a su proselitismo, del cual también participaron algunos dirigentes de Adida. Sin embargo, el encanto terminó luego de conocerse la incorporación del padre Camilo Torres a la guerrilla y su posterior muerte.

Durante 1963, ante el permanente desinterés del gobierno de Guillermo León Valencia por los problemas de los educadores, Fecode organizó su primera huelga nacional, que contó con el firme apoyo de los docentes antioqueños. Además del reintegro de la Junta Nacional de Escalafón, Fecode obtuvo que el gobierno la reconociera en la práctica como la vocera legítima del magisterio colombiano. El deterioro en las condiciones de vida del pueblo colombiano durante el gobierno de Valencia, obligó a Fecode a citar a un pleno nacional en enero de 1966 que aprobó la realización de un paro nacional para el 7 marzo, pues se quería aprovechar que el país se encontraba en pleno debate electoral presidencial para agitar las reivindicaciones del magisterio. Adida participó decididamente de este movimiento, con una característica nueva: recibió la solidaridad de nuevas fuerzas políticas revolucionarias que se manifestaban al interior del Bloque Sindical Independiente de Antioquia y que con el tiempo influirían en la orientación del movimiento magisterial. Luego de un nuevo acuerdo con el gobierno nacional, Fecode levantó el paro nacional el 30 de marzo de 1966.

La llegada al poder de Carlos Lleras Restrepo no significó para los colombianos ningún cambio significativo en sus condiciones de vida. La pobreza y el atraso siguieron campeando en ciudades, pueblos y veredas. Fecode nuevamente se movilizó y convocó la histórica marcha de los educadores desde Santa Marta a Bogotá, la cual recorrió durante 33 días –entre septiembre y octubre– centenares de kilómetros denunciando la situación de los maestros colombianos. El acuerdo alcanzado con el gobierno nacional fue violado en Antioquia por el gobierno departamental, por lo cual Adida decidió declarar el segundo paro general a partir del 5 de julio de 1967.

La represión del justo movimiento de los educadores antioqueños no se hizo esperar: inmediatamente se declaró la ilegalidad del paro, se suspendió por tres meses la personería jurídica de Adida, se congelaron sus fondos sindicales, se suspendieron de sus cargos cinco maestros, se publicó una lista de candidatos a la misma sanción y se amenazó con no pagar los días de huelga. Incluso se orientó a los

almacenes de abarrotes donde los educadores mercaban a crédito, para que suspendieran este servicio, a fin de resquebrajar la voluntad de lucha de los socios de Adida. El gobierno departamental detuvo a los dirigentes de Fecode Adalberto Carvajal y Heliodoro Agudelo, quienes se encontraban en la ciudad asesorando el paro. Después de más de un mes, el gobernador de Antioquia decretó el adelanto de las vacaciones, anunciando el no pago de las mismas. Ante la intransigencia del Ejecutivo departamental, Adida, apoyándose en Fecode, buscó en Bogotá la intermediación de diversos personajes de la vida nacional a fin de encontrarle una salida al conflicto, lo cual finalmente se alcanzó cuando el gobierno nacional orientó al departamental para firmar un acuerdo que permitiese levantar el movimiento.

El acuerdo alcanzado contenía una alza del 10 % en los salarios, la no represalia a los participantes del movimiento, la recuperación del tiempo dejado de laboral, y por tanto, el pago del mismo. Este movimiento consolidó la presencia de la Democracia Cristiana y del Partido Liberal al interior de Adida. Sin embargo, comenzaba a emerger una nueva corriente imbuida por la corriente revolucionaria en boga, representada, entre otros, por el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, Moir, que por entonces se llamaba Bloque de Avanzada y contaba ya entre sus militantes a Luis Alfonso Berrío Mejía, actual presidente de Adida, además del Partido Comunista, el Partido Comunista Marxista Leninista y sus posteriores escisiones en la Liga Marxista Leninista, luego la Tendencia M-L., y más adelante las diversas organizaciones de carácter trotskista.

Esta contradicción entre las viejas fuerzas liberales, hasta entonces dominantes al interior de Adida, y las nuevas fuerzas revolucionarias, se agudizó desde 1970, cuando, por un lado, el presidente de Adida, Víctor Baena –quien a la vez había sido presidente de Fecode–, decidió apoyar la candidatura a la Presidencia de la República del conservador Belisario Betancur, y, por el otro, el portentoso movimiento estudiantil de 1971 contra el gobierno de Misael Pastrana, colocó en auge a las organizaciones de izquierda, las cuales paulatinamente desplazaron a la vieja aristocracia obrera de los puestos de dirección en el movimiento sindical.

La lucha por el Estatuto Docente

Con una joven izquierda al frente de Fecode, el magisterio se propuso alcanzar nuevas metas, siendo la principal conquistar un estatuto que regulara la carrera docente en Colombia. Muy temprano, en los albores de la década de los años setentas, los maestros colombianos decidieron iniciar un paro nacional de educadores en marzo de 1972, siendo presidente Misael Pastrana y ministro de Educación Luis Carlos Galán Sarmiento, para protestar contra un estatuto docente expedido por el gobierno, que lejos de satisfacer las expectativas de los educadores, tenía un claro contenido represivo. La junta directiva de Adida, aún mayoritariamente liberal, se opuso al paro nacional, con el argumento de que en Antioquia no había condiciones, restándole así un importante refuerzo al movimiento, que ya había sido ilegalizado, al paso que las vacaciones escolares se habían adelantado. Esta actitud recalcitrante del sector mayoritario de Adida contra el paro produjo un distanciamiento con Fecode y a la vez con Proas el sindicato que agrupaba a los educadores de secundaria en Antioquia.

En agosto de 1973, la no nivelación salarial de los sueldos de primaria y secundaria, el no pago del reajuste salarial de ese año, las destituciones en varios departamentos, las exclusiones del escalafón, el no pago de prestaciones sociales y la amenaza de presentar a consideración del Congreso un estatuto docente que eliminara los derechos adquiridos de los educadores, llevaron a Fecode a decretar un

nuevo paro nacional y una vez más la dirección liberal, aún mayoritaria en la junta directiva de Adida, decidió no participar del movimiento, debilitándolo significativamente y permitiendo al gobierno nacional golpear duramente al magisterio y sus sindicatos, destituyendo decenas de educadores en todo el país. Después de haber resquebrajado el paro y realizado esquirolaje, la junta directiva de Adida abrió una cuenta corriente en el Banco Cafetero para recoger solidaridad para los despedidos. El gobierno departamental aplaudió la decisión de Adida de no participar en el paro y premió con prebendas a los liberales de la junta directiva.

Adida había caído en la desmovilización cuando se iniciaba en 1974 el gobierno de Alfonso López Michelsen. La izquierda, con la consigna de recuperar a Adida para el magisterio, inició una ofensiva política entre los maestros, visitando municipios, comunas y establecimientos educativos, explicando la causa de la crisis, invitando a reagruparse y fortalecer la organización sindical y vendiendo el bono de solidaridad con los educadores despedidos que había emitido Fecode. Ante la negativa del sector recalcitrante de la junta de fortalecer los medios de comunicación institucionales, florecieron las expresiones escritas de las organizaciones políticas. Así, la izquierda fue ganando adeptos entre los delegados y en la asamblea general de abril de 1975 obtuvo cuatro representantes en la nueva junta directiva, aunque continuó siendo minoritaria.

Fecode presentó al gobierno de López Michelsen un pliego de peticiones donde fundamentalmente solicitaba un aumento salarial del 50%, la negociación de un estatuto docente y estabilidad laboral. Ante el fracaso de las conversaciones con el ministro de Educación Hernando Durán Dussán, Fecode convocó en marzo de 1975 un pleno nacional que definió un paro de 48 horas para abril. El sólo anuncio del movimiento provocó por parte del gobierno nacional la expedición de los decretos 528 y 541, por los cuales se sancionaría fuertemente a las organizaciones sindicales del magisterio y a los educadores que participaran del mismo.

El paro nacional se realizó, pero en Antioquia, donde la izquierda al interior de Adida aún era minoría, no se impartió claramente la orden de cese de actividades y por tanto la participación del magisterio fue parcial, más debido a la acción de los grupos revolucionarios que a la decisión institucional de la junta. Aún así, 38 educadores de Antioquia, tanto de Adida como de Proas, fueron suspendidos por participar en el paro. En el país fueron centenares los maestros despedidos por el gobierno de López Michelsen, suspendidas las personerías jurídicas de varios sindicatos, congelados los salarios del magisterio y suspendidos los ascensos en el escalafón, lo cual debilitó la acción de Fecode durante 1976.

Sin embargo, en enero de 1977, durante época de vacaciones y sin ninguna negociación con el magisterio, el gobierno expidió el Decreto 128, conocido como Estatuto Docente de Durán Dussán, que limitó en extremo los derechos de los educadores, declarando empleados públicos a los maestros, con lo que les prohibía realizar cese de actividades, y lo complementó con el Decreto 224, el cual incrementó los salarios del magisterio en un 20%, cuando el aumento del costo de vida del año anterior había alcanzado el 47%. Inmediatamente Fecode hizo un llamado a la acumulación de fuerzas para combatir estas medidas contra el magisterio. La discusión del nuevo estatuto docente se puso al orden del día y los activistas de izquierda en Adida promovieron el más intenso debate contra las medidas del gobierno de López que afectaban a los docentes. Igualmente, la expedición del Decreto 128 sirvió para que en Antioquia se produjera un acercamiento importante entre el sindicato de los educadores de

primaria, Adida, y el de los profesores de secundaria, Proas, y fue así como se empezó a hablar de fusionar las dos organizaciones.

Fecode promovió un plebiscito para exigir la derogatoria del Decreto 128 y obligar al gobierno a negociar uno nuevo. La intensa campaña agitacional de Fecode en tal sentido, permitió que el nuevo ministro de Educación, Rafael Rivas Posada, suspendiera transitoriamente la medida en marzo de 1977 y conformara un comité gobierno-educadores para tratar de concertar un nuevo estatuto docente. A pesar de esta victoria trascendental de los maestros, Fecode convocó para comienzos de abril su XXIV Pleno Nacional, con el propósito de unificar criterios sobre el estatuto docente a negociar y definir las líneas de acción a seguir, ya que continuaban sin solución los graves problemas económicos, sociales y laborales de los docentes. Fecode aprobó la realización de un paro nacional y concedió a la junta nacional la potestad de fijar la hora cero. El Pleno Nacional de Fecode, realizado el 10 y 11 de agosto, decidió participar en un paro cívico nacional que las centrales obreras venían preparando para el mes de septiembre. Mientras tanto, en Adida se adelantaba una intensa campaña para elegir nueva junta directiva, toda vez que el enfrentamiento entre la izquierda y la derecha era más agudo. Sin embargo, la importancia de las tareas convocadas por Fecode hizo que la elección se aplazara para después del paro nacional, el cual se inició el 22 de agosto y, luego de arduas jornadas de negociación con el gobierno, culminó el 6 de octubre. Durante esta movilización se destacó la participación del magisterio en el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre en el que un desbordamiento general de tres días expresó el repudio del pueblo colombiano contra el "mandato de hambre" de López Michelsen.

En este contexto se realizaron las elecciones para nueva junta directiva en Proas y Adida y, por fin, la izquierda alcanzó las mayorías en ambas organizaciones sindicales. En Proas, la nueva junta directiva elegida a finales de 1977, fue oficialmente reconocida en enero de 1978 Adida, en tanto, celebró su asamblea el 3 de marzo, en la cual la derecha liberal –mayoritaria por más de una década– quedó reducida a un miembro en la junta directiva, mientras la izquierda alcanzó los otros nueve escaños. Por primera vez, 27 años después de su fundación, la derecha política era relegada a la oposición.

Así, con la movilización del magisterio colombiano y con una izquierda mayoritaria al interior de Adida y Proas, se despidió al gobierno de López Michelsen y se recibió a su sucesor, el liberal Julio César Turbay Ayala quien, apenas a un mes de su posesión, expidió el "Estatuto de Seguridad" con el fin de contrarrestar la oleada de descontento popular iniciada un año atrás con el Paro Cívico Nacional. Al amparo del Estatuto de Seguridad, decenas de activistas políticos y sindicales fueron arrestados y torturados, las organizaciones sindicales perseguidas, las libertades civiles cercenadas y los derechos fundamentales conculcados.

En esta compleja situación, Fecode mantuvo en alto la bandera de lucha por un estatuto docente para el magisterio y entró en negociaciones con el conservador Rodrigo Lloreda Caicedo, ministro de Educación de la administración Turbay. Las movilizaciones del magisterio durante el año 1979 permitieron que por fin el 14 de septiembre el gobierno expidiera el Decreto 2277 o Estatuto Docente del Magisterio Colombiano, que se constituyó en una de sus victorias históricas.

Mientras tanto, en Antioquia, al fragor de esas jornadas victoriosas, los educadores de primaria y secundaria culminaron su proceso de unidad. El 23 de agosto de 1979 la asamblea de Proas determinó fusionarse con ADIDA y fijó el 13 de septiembre para elegir los delegados de la nueva organización y

el 3 de octubre para elegir la nueva junta directiva en la cual la mayoritaria abrumadora del Partido Comunista M-L dio inicio a un período de su hegemonía en Adida, mientras que la representación oficial del Partido Liberal perdió el único escaño que conservaba en la junta directiva. Así culminó el proceso por lograr la unidad sindical de los educadores antioqueños.

Los años ochenta y la política de paz

Belisario Betancur tuvo en la política de paz el eje central de su gobierno, alcanzando acuerdos de desmovilización con dos organizaciones guerrilleras: el M-19 y el Ejército Popular de Liberación, EPL. A pesar de que efectivamente sus miembros abandonaron la lucha armada y se acogieron a programas de reinserción, muy pronto muchos de sus miembros cayeron asesinados. Esta situación afectó también a numerosos activistas políticos, sindicales y populares y se prolongó en el gobierno de Virgilio Barco. El 25 de agosto de 1987 murió asesinado Luis Felipe Vélez Herrera, presidente de Adida, cuando ingresaba en horas de la mañana a la sede sindical. Ese mismo día, y en el mismo sitio, cuando llegaban a la velación de Felipe Vélez, fueron igualmente asesinados los doctores Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, prominentes defensores de los derechos humanos en el departamento.

Sin embargo, la política de paz gubernamental creó profundas contradicciones al interior del PCC–ML, el cual se fue dividiendo en diversas organizaciones. Un grupo importante de maestros de Antioquia se fue nucleando alrededor de Jaime Dussán, entonces presidente de Fecode, y la mayoría de la junta directiva de Adida también se alineó de esta manera. Así se despidió el decenio y el país se aprestó a recibir la conflictiva década de los noventa.

El neoliberalismo y la eliminación de los derechos adquiridos

El mundo, que había presenciado durante décadas la lucha entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, por el dominio global, observó cómo, a finales de los ochenta, el modelo soviético se derrumbaba estruendosamente, dejando el camino allanado para que Estados Unidos impusiera su hegemonía, para lo cual implementó el modelo económico neoliberal, que no es otra cosa que permitir al gran capital internacional, particularmente norteamericano, expandirse por el mundo sin obstáculos, extrayendo hasta la última gota de riqueza de los países, condenando a los trabajadores y a la humanidad al atraso y la miseria.

En Colombia, le correspondió a César Gaviria, en la presidencia desde 1990, impulsar esta política por medio de dos medidas fundamentales: la apertura económica y las privatizaciones. Las consecuencias no se hicieron esperar y muy pronto nuestro país fue invadido por toda suerte de bienes y servicios extranjeros que paulatinamente fueron debilitando el aparato productivo nacional hasta llevarlo a la ruina que conocemos hoy, con su secuela de desempleo, miseria, violencia y pérdida de soberanía. Pero no es posible adelantar esta política antinacional y antipopular sin atropellar los derechos adquiridos por los trabajadores, por lo que el gobierno de Gaviria impuso una serie de reformas al régimen laboral y a la seguridad social para hacer más expedita la superexplotación del trabajo e incrementar la tasa de utilidad que requiere el gran capital. Se inició entonces una ofensiva de grandes proporciones para arrebatar a los trabajadores sus conquistas, mientras que éstos pasaban a un período de resistencia para defender lo alcanzado. El magisterio colombiano luchó denodadamente por conquistar una reforma educativa que mejorara las condiciones generales de la prestación del servicio,

sobre la base de defender la educación pública y los derechos de los educadores, lográndolo con la expedición de la Ley 60 del 12 de agosto de 1993 y la Ley 115 de febrero de 1994. Adida estuvo presente en todas estas luchas junto a Fecode y el resto de educadores del país y también fue artífice de esta otra importante victoria del magisterio colombiano.

El gobierno de Samper y los intentos de conciliación

En septiembre de 1994, Adida inauguró su sede sindical –sin duda alguna la mejor sede sindical del país– y en noviembre de 1996 adquirió su sede vacacional en el municipio de San Jerónimo, lo que fue saludado como un logro social de los educadores. Pero la llegada al poder de Ernesto Samper en 1994 tuvo hondas consecuencias para Fecode, y para Adida en particular, puesto que el grupo político del expresidente de Fecode y senador de la República, Jaime Dussán, decidió conciliar con el nuevo gobierno, lo que condujo a Fecode a la crisis y la desmovilización. La actitud conciliadora de Dussán también ocasionó una crisis al interior de su movimiento, hasta entonces hegemónico en la junta directiva, el cual se dividió, permitiendo un nuevo acuerdo mayoritario compuesto inicialmente por el Moir, el Partido Comunista, el Partido Comunista M-L, Participación y Democracia, Educadores Demócratas y Maestros Independientes, el cual, sobre la base programática de defender la educación pública, los derechos de los educadores y la independencia de las organizaciones sindicales frente al gobierno, ha regido los destinos de Adida desde 1996, asumiendo alternadamente la presidencia Luis Alfonso Berrío Mejía, posteriormente Vicente Brayan Rivas y luego Jairo Arenas Acevedo. Este acuerdo mayoritario en Adida hizo posible que los maestros antioqueños acataran firmemente las orientaciones de Fecode, para entonces también renovada en su dirección nacional, preservando la unidad y el espíritu de lucha de los educadores colombianos.

El gobierno de Andrés Pastrana y la resistencia del magisterio

El gobierno de Andrés Pastrana Arango, desde agosto de 1998, ha significado para los colombianos el más nefasto arrasamiento general de los pocos derechos aún vigentes desde el inicio de la imposición del neoliberalismo. La educación pública, el magisterio y sus organizaciones sindicales han sido uno de sus blancos favoritos. La política oficial, en acatamiento de los dictados del Fondo Monetario Internacional, ha consistido en privatizar la educación, derogar derechos adquiridos por los educadores e intentar liquidar las organizaciones sindicales de los maestros, en particular a Fecode, en una ofensiva contra la educación pública sin precedentes en los últimos cien años. En 1999, los educadores antioqueños se aprestaron a elegir nueva junta directiva, la cual dio como resultado un fortalecimiento del acuerdo mayoritario que suma sus fuerzas con la llegada a la dirección sindical de la Alianza Estratégica por Urabá y Antioquia, y de Maestros Nacionales, pero con el lamentable retiro del Partido Comunista M-L. El acuerdo mayoritario elige para el nuevo período a Luis Alfonso Berrío Mejía como presidente; Oved Rojas Vergara, vicepresidente; Carmen Emilse Guzmán Vargas, secretaria general; Jairo Arenas Acevedo, fiscal; Arístides Hernández Castro, tesorero, posteriormente reemplazado por Henry Mosquera Mosquera; Rosalba Gómez Vásquez, secretaria de Asuntos de la Familia; Vicente Brayan Rivas, secretario de Prensa y Propaganda; Alirio Salazar Aguirre, secretario de Asuntos Laborales; Octavio Flórez Cano, secretario de Asuntos Culturales; Luis Alonso Londoño Zapata, secretario de Asuntos Pedagógicos, y Gonzalo Hoyos Alzate, secretario de Asuntos Intersindicales. Con esta composición de la junta directiva, Adida respondió al llamado de Fecode a luchar contra el Plan Nacional de Desarrollo, instrumento lesivo para la educación pública y los derechos de los

educadores. Las grandes movilizaciones de maestros y la posterior acción de la Corte Constitucional lograron echar atrás tan nefasto propósito del gobierno nacional.

Sin embargo, posteriormente el gobierno puso a consideración del Congreso el Proyecto de Acto Legislativo 012, el cual creaba las bases para privatizar la educación pública, reformar las condiciones laborales de los maestros y liquidar a los sindicatos. Luego de grandes movilizaciones de educadores, estudiantes y padres, y por escaso margen, el gobierno nacional logró hacer aprobar el Proyecto, que se convirtió en el Acto Legislativo 01. En noviembre del año pasado, el ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto de Ley 120, para reglamentar el Acto Legislativo 01, siendo finalmente aprobado por unanimidad (es decir con el apoyo y el voto positivo del senador Jaime Dussán) en la madrugada del 14 de diciembre, asestando así un golpe mortal a la educación pública, al viabilizar su desmonte por medio de la municipalización, la plantelización, la contratación del servicio con entidades privadas, el recorte presupuestal, el subsidio a la demanda y la capitación, y arrasar con derechos adquiridos por los docentes al derogar el Estatuto Docente y las Leyes 60 y 115, hasta ahora las mayores conquistas del magisterio. La Ley 120 elimina la estabilidad; congela los ingresos de los educadores al hacer casi imposibles los ascensos en el escalafón; introduce los traslados arbitrarios y congela la nómina. Con la municipalización y la plantelización de la educación la lucha del magisterio se atomizará y dispersará, quedando los sindicatos y Fecode en vías de liquidación.

Es en el contexto de este monstruoso atentado del Fondo Monetario Internacional y del régimen de Pastrana contra la educación pública –avalado incluso por quien llegara al Senado en nombre del magisterio– cuando Adida cumple 50 años de lucha por defender los derechos de los docentes, la educación pública y la organización sindical. En medio de las dificultades de la hora presente, el magisterio antioqueño no renunciará a su tradición de lucha y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de Fecode para adelantar un gran movimiento nacional de resistencia contra estas nefastas medidas e iniciar un proceso de reagrupamiento y acumulación de fuerzas que permita a los maestros volver a ganar la iniciativa y reconquistar una reforma educativa que respete los derechos adquiridos y preserve la educación pública como patrimonio nacional e instrumento imprescindible en la lucha por la soberanía nacional y el desarrollo material y cultural del país.

Notas

1. Jiménez Díaz, Elkin y Gloria Estrada Pérez, *Magisterio Antioqueño 1900-1980*, Medellín, Adida, Comfenalco, Concejo de Medellín. 1993. P. 45.
 2. Op. cit. P. 125.
 3. Op. cit. P.180.
-